

AMPAIRO

Promovida ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Felipe Vargas, contra el Juez 1º del ramo criminal de Mérida, que lo retiene en prision.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El adjunto informe dado por el C. Juez 1º de lo criminal de esta Capital, resuelve la duda que el infrascrito pulsó en su anterior pedimento sobre si la rebelion por la cual se habia proveido la prision formal del C. Felipe Vargas, que se queja de ella en el ocuroso que motiva este juicio, era contra la seguridad interior del Estado ó contra los Poderes Supremos de la Nacion; pues dicha autoridad declara, que el delito por el que juzga al quejoso, se refiere á un hecho que afecta exclusivamente á los intereses del Estado; y como en este caso es competente el expresado Juez de lo criminal para conocer de él, conforme al artículo 924 del Código local en que funda sus procedimientos, y no es contrario á la Constitucion de la República, como lo confirma la circunstancia de que el artículo 1095 del Código penal expedido, respecto de los delitos contra la Federacion para toda la República misma, no incluye el que se dice cometido por el C. Felipe Vargas. Con cuyo fundamento y de la ley de 20 de Enero de 1869, el Fiscal pide á V. declare improcedente el recurso de amparo promovido en el presente juicio.

Mérida, Octubre 24 de 1873. — *P. Hijuelos.*

Es copia que certifico. Mérida, Diciembre 5 de 1873. — *Prudencio Hijuelos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mérida, Noviembre 12 de 1873. Visto este juicio de amparo promovido por el C. Felipe Vargas, contra el C. Juez 1º de lo

criminal de esta capital, que alega lo tiene en prision, violando el artículo 16 de la Constitucion federal. Visto el auto en que se niega la suspension del acto reclamado; lo informado por el Juez referido, sobre lo principal; lo pedido por el C. Fiscal; la citacion para sentencia, con cuanto mas ver y tener presente convino. Considerando: que segun el artículo 924 del Código penal del Estado, los Jueces locales son competentes para juzgar los delitos de rebelion contra las autoridades del Estado, por cuyo delito tiene declarado bien preso al quejoso el C. Juez 1º de lo criminal de esta ciudad que lo juzga; que la disposicion del referido Código penal, está en armonia con el artículo 1095 del Código penal del Distrito federal y Territorio de la Baja California, en los delitos comunes y de toda la Nacion, en los delitos contra la Federacion; que en consecuencia, segun este último artículo, los Jueces federales solo deben conocer del delito de rebelion cuando sea contra la Federacion, como no lo es en el caso de que se trata; que dichas disposiciones, en nada se oponen al artículo 16 de la Constitucion federal, ni á ninguno otro de ella, razon porque no se ha violado ninguna garantia individual en la persona del quejoso, con los procedimientos del Juez 1º de lo criminal de esta ciudad; que lo juzga por rebelion contra las autoridades locales.

Por estos fundamentos legales, y de conformidad con el parecer fiscal, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla: 1º La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Felipe Vargas, contra el C. Juez 1º de lo criminal de esta Capital, que lo juzga por el delito de rebelion contra las autoridades locales. 2º Sáquese testimonio de este fallo para publicar, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para su revision, con arreglo á los artículos 13 y 27 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869. Notifíquese. — *I. Manzanilla.* — Ante mí. — *José Anastasio Castillo.*

Es copia que certifico, para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion. Mérida, Diciembre 5 de 1873.—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 19 de 1874. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatán por Felipe Vargas contra el Juez 1º del ramo criminal de Mérida, que lo retiene en prision sin haber precedido mandamiento escrito fundando la causa legal de ese procedimiento, con violacion de la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitución federal; y considerando: que según aparece de las constancias de autos, el Juez 1º del ramo criminal que conforme á las leyes del Estado es competente para conocer de los delitos comunes y de los de rebelion contra las autoridades del mismo Estado, dictó por escrito la orden en virtud de la cual fué reducido á prision el quejoso, dando por fundamento de ella estar acusado de los delitos de rebelion y robo á mano armada.

Por cuyo motivo, no habiendo existido violacion alguna de la garantía constitucional invocada, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 12 de Noviembre del año próximo pasado y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Felipe Vargas, contra el Juez 1º de lo criminal de Mérida que lo redujo á prision para juzgarlo por delitos de rebelion contra las autoridades locales y robo á mano armada.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Supre-

ma de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. —*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan S. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Castañeda Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José G. Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 25 de 1874.—*Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por D^a Amada Ponce de Saenz, representada por D. Nabor Hernandez, contra el Juez de 1ª instancia de la capital del mismo Estado, por violacion de las garantías consignadas en los arts. 20 y 27 de la Constitución federal, é infraccion del art. 1º de la misma y el 6º de la ley de 30 de Diciembre de 1867.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

D^a Amada Ponce de Saenz pide el amparo de la Justicia federal, contra los procedimientos del Juez de 1ª instancia de ese partido y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en un negocio judicial en que le sobran recursos ordinarios de que no ha querido hacer uso, tal vez para pretender que V. contravenga á la prohibicion expresa del art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, que dice: "No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales," y viole manifiestamente el art. 14 de la Constitución de la República, sin designar la solicitante siquiera, cual es la garantía individual que considera violada en su persona.

Por tales fundamentos, esta Promotoria tiene por improcedente el recurso, y pide á V. se sirva denegar el amparo.